

Noemí M. Girbal-Blacha

# Acerca de la memoria y la reflexión histórica en la Argentina bicentenaria

## 1. A modo de preámbulo

La construcción de la identidad<sup>1</sup> y la memoria colectiva en la nación Argentina han resultado tarea ardua en medio de las crisis institucionales, financieras y económicas que han impactado en ambas a lo largo de su historia. Más allá de las guerras civiles argentinas en los orígenes fundacionales de la nación, las crisis de fines del siglo XIX y la multicausal y orgánica de la década de 1930, dicha trilogía –identidad, crisis y memoria– cobra cuerpo en la Argentina desde la segunda mitad de la década de 1960, cuando se plasman perfiles desconocidos en relación con el pasado mediato. Posiblemente porque los impactos han sido más violentos, estructurales, difíciles de superar y cíclicamente presentes. No obstante, la memoria colectiva<sup>2</sup> solo guarda recuerdos fragmentados, algunas imágenes, de las crisis complejas que afectaron la estructura económica, social e institucional del país, así como la escala de valores vigentes, y que su-

mieron a la sociedad en el desconcierto y la fragmentación, hasta poner en riesgo –en los albores del siglo XXI– la identidad nacional. La historia ha pretendido dar cuenta desde miradas diversas y trasdisciplinarias de ese pasado, que no admite verdades absolutas.

Existe una “vital necesidad de sumergirse en el pasado para bucear los orígenes de sus quebrantos” (*Revista de Historia*, 1957, p. 3), para comprender y hacer comprender la vigencia de los sucesos como problema histórico. Si, como lo expresara Fernand Braudel hace varias décadas atrás, “la historia no es más que una constante interrogación de los tiempos pasados en nombre de los problemas y las curiosidades –y aun de las inquietudes y angustias– del tiempo presente que nos rodea y nos sitia”, y si reconocemos que es tan importante un buen planteo de los problemas como su resolución (aunque sea parcial), entonces las últimas etapas por las que ha pasado y pasa la Argentina exigen una profunda reflexión histórica. Es preciso

<sup>1</sup> Identidad entendida como un proceso social complejo ligado a la autoconciencia (Di Tella et al., 2006).

<sup>2</sup> El concepto “memoria colectiva” pertenece a Maurice Halbwachs (1925). Véase Namer (1999) y Palti (1999).

señalar diferencias, discontinuidades y también similitudes.

Las representaciones del pasado se tornan fundamentales para la comprensión de los sucesos, de las fracturas sociopolíticas a lo largo del tiempo; especialmente porque la identidad nacional no es solo un concepto de las ciencias sociales.<sup>3</sup> “La memoria participa de la construcción de la identidad de nuestras sociedades” (Bedarida, 1999) y la historia tiene que mantener presentes y consolidar “los lugares de memoria” tanto como la certidumbre, en un mundo incierto como en el que hoy vivimos y que para los argentinos rememora desde una mirada distante y transatlántica, la salida de la aguda crisis vivida en el 2001 (Nora, 1999; Quattrocchi-Woisson, 1995).

Este trabajo se propone reseñar críticamente los hitos fundamentales del pasado más o menos mediato de la nación Argentina, para interpretar y reflexionar acerca de sus significados, como una contribución a la formulación de políticas públicas, sin dar la espalda a la historia, ejercitando la memoria, con el propósito de fijar objetivos nacionales y regionales de largo plazo. Sabido es que existe un uso político del pasado y –tal vez– por esa razón la posición que hoy comparten la mayoría de los historiadores, descreídos de las grandes interpretaciones y juzgando imposibles las síntesis ilusorias que ponen en peligro una historia comprensiva, admiten la pluralidad de interrogantes, la diversidad metodológica y la variedad de fuentes; es decir, aceptan un mosaico

de verdades que no son necesariamente complementarias y acumulativas (Revel, 1995; un estudio más exhaustivo en Revel, 1996).

Pasar revista a la historia es importante para gobernantes y gobernados (Blacha, 2005b). No es extraño entonces que historia y política renueven un contacto que le es propio y que reconoce lejanas raíces. Recordarlas y revisarlas críticamente es un compromiso y una necesidad colectiva. Los historiadores no pueden y no deben excluirse ni ser excluidos de ese saludable ejercicio intelectual, en medio de las pautas que impone la sociedad del conocimiento que pretende apostar a la inclusión social.

## 2. Raíces históricas de procesos críticos

### *De la Argentina moderna a la crisis de 1930*

En la Argentina moderna, agroexportadora, receptora de inmigración masiva y capital externo, donde la posesión de la tierra otorga poder político y es símbolo de prestigio social, la nación aparece gobernada por una élite de “liberales en lo económico pero conservadores en lo político” (Mc Gann, 1965). Su identidad construida mirando a Europa y de espaldas al pasado aborigen encuentra entonces su etapa de consolidación. Una vez resuelta en 1880 la federalización de Buenos Aires, se organiza un poder político fuerte, basado en una “alianza de notables” (Botana, 1979; Carcano,

<sup>3</sup> Véase Hobsbawm (1972), Ricoeur (2000), Wagner y Elejabarrieta (1996), Ruano-Borbalan (1999), Vovelle (1988), Le Goff (1988). Es que “la evolución de las sociedades de la segunda mitad del siglo XX deja en claro la importancia de la posición que representa la memoria colectiva”, afirma Le Goff.

1977) que expresa la suma desigual de voluntades provinciales y organiza una estructura política de alcance nacional. Se inaugura la etapa de la “paz y administración” de base positivista, que se esfuerza por legalizar el poder y pacificar el país, tanto como por transformar los perfiles criollos de la Argentina previa a 1880. Los sectores terratenientes del litoral conjugan sus intereses con los de los inversores, exportadores, importadores y agroindustriales del interior para hacer posible la Argentina del “progreso indefinido”, pero desigual.

La estadística plasma el *boom* socioeconómico del país, “la revolución en las pampas” y “el progreso argentino” (Scobie, 1968; Girbal-Blacha, 1982; Cortés Conde, 1997), que coexisten con la consolidación del régimen de arrendamientos, la falta de crédito agrícola, el monopolio de la mecanización rural y una comercialización cerealera concentrada y dependiente de consignatarios, acopiadores y cuatro grandes exportadores (Bunge y Born, Dreyfus y Cía., O. Bemberg y Huni Wormser). Los efectos de la política oligárquica y la coyuntura financiera internacional conducen al “apogeo y crisis del liberalismo” hacia 1890, cuando se desata la crisis monetaria y fiscal que, unida a la inestabilidad política, conduce al primer llamado de atención que recibe el modelo implementado por estos hombres de la generación del 80 (Ferrari, 1978; Duncan, 1983; Cortés Conde, 1989; *La Nación*, 30/04/1989, tercera sección, p. 1).

El Estado se pone al frente del desarrollo económico y se prepara para recibir el crédito externo y con él —a mediano plazo— los riesgos de la dependencia, aunque tarde en declararlos a través del discurso. La crisis ocurrida

entre 1889 y 1893 tiene perfiles internacionales y afecta las finanzas de la República Argentina, que pasa del endeudamiento a la cesación de pagos. Un proceso inflacionario incontrolable acompaña esta situación. Especulación, expansión del crédito y emisiones sin control del circulante —al amparo de la ley de bancos garantidos de 1887— sumen al país —como expresión de tendencias comunes a otras naciones— en una crisis financiera y comercial, que eclosiona en 1890 y define un “nuevo ciclo crediticio” (Marichal, 1988).

El oro se cotiza a \$139 en 1886, a \$251 en 1890 y a \$332 dos años después. El aumento en las importaciones y el consecuente drenaje de oro deteriora la balanza de pagos. Las provincias ven crecer ilimitadamente su endeudamiento externo. Entre 1886 y 1890 la deuda pública argentina se triplica; el desequilibrio fiscal se acentúa a causa de la desconfianza en los mercados y promueve el refugio inversor en el oro. La oferta monetaria crece el 150% entre 1886 y 1890, mientras la moneda se devalúa el 332% entre 1883 y 1891. La cuestión adquiere aristas desconocidas para los argentinos de entonces.

Se restringe el crédito y quiebran el Banco Nacional, el Banco Hipotecario Provincial y una larga moratoria afecta al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, estalla la “revolución desde adentro”, y es vencida. El resultado final es óptimo para “los notables” (Botana, 1979). La continuidad institucional se preserva pero la Argentina ya no sería la misma y los sectores medios, militantes en los partidos políticos modernos, como la Unión Cívica Radical, se alinean paulatinamente tras la abstención, la intransigencia y la revo-

lución, propuestas por su líder, Hipólito Yrigoyen. La reforma electoral de 1911-1912 termina por encumbrar, en 1916, al radicalismo en el gobierno nacional, aunque no en la cima del poder.

A pesar de esta pérdida de homogeneidad en las relaciones de la élite dirigente, el acuerdo intersectorial se compone una y otra vez (Blacha, 2005a). La reconciliación política se juzga indispensable para superar esta llamada “crisis del progreso” que no afecta las bases productivas de la Argentina moderna. Es una crisis monetaria y fiscal. El plan de reconstrucción procura sanear entonces las finanzas en momentos en que se desconoce el monto exacto del circulante y de la deuda de las provincias.

Para una amortización y conversión gradual de la moneda se crea la Caja de Conversión. Liquidado el Banco Nacional, nace en 1891 el Banco de la Nación Argentina, con la participación del capital privado. Se cancelan las concesiones ferroviarias y la venta indiscriminada de tierra pública, se regulariza la deuda externa, se suscribe un empréstito interno, se recortan los gastos y se fijan altos impuestos internos (1891). En síntesis: se implementa un singular ajuste para restablecer las condiciones favorables para la expansión productiva. Sus resultados son: una baja del oro y la consecuente valorización del papel moneda hacia mediados de la década de 1890, que derivan en un aumento de la desocupación y migraciones internas en busca de trabajo, ante la reacción de los grandes exportadores y productores agropecuarios que deben vender sus productos a valor oro, en baja, y pagar sus impuestos y salarios en papel moneda valorizado. Una situación que procura corregir el régimen de conversión monetaria de 1899

(1 peso papel= 0,44 \$ oro) (Tornquist, 1920) cuya misión es regular el valor de nuestra moneda al mismo tiempo que intenta disminuir los efectos del malestar social, que paulatinamente pasa de la ciudad al campo. El “control social” está en juego.

El estallido de la Primera Guerra Mundial deteriora la inversión externa, el flujo migratorio y el embarque de cereales ante la falta de bodegas y la ventajosa competencia que ofrecen Canadá y los Estados Unidos. A esta coyuntura se suman otros factores internos, como el fin de la expansión horizontal agraria, el descenso en los rendimientos y los altos costos de producción, que junto con la baja en los precios internacionales del trigo (desde 1926) y del maíz (desde 1928) deterioran las ventajas comparativas de la agricultura argentina y atentan contra la racionalidad económica del productor rural (Girbal-Blacha, 1988; O’Connell, 1984). Se produce en conjunto “una suerte de teoría contestataria del progreso indefinido” (Halperin Donghi, 1984).

La época de posguerra jaquea a la ganadería de la pampa húmeda. Una situación que induce al sector pecuario más importante de la economía nacional a pedir y obtener el auxilio estatal para asegurar una rentabilidad aceptable al productor de ganado, que asiste al cambio en las exigencias de la demanda del mercado externo (del congelado al enfriado). La oposición de los frigoríficos torna poco efectiva la acción oficial. La respuesta del sector agropecuario más encumbrado es la fórmula “comprar a quien nos compra”, que refuerza los nexos con Inglaterra. La situación coincide con los efectos del *crack* neoyorquino de 1929 y la primera ruptura

del orden institucional en la Argentina, ocurrida el 6 de septiembre de 1930.

### **En tiempos del Estado interventor, nacionalista, dirigista y planificador**

La crisis de 1929 afecta a todo el mundo occidental y especialmente a una economía abierta como la argentina, cuando llega a su fin el paradigma del crecimiento hacia afuera. Los efectos no son solo económico-financieros; se expresan en alteraciones de la escala de valores vigentes (ahorro, propiedad, orden) y también en la mentalidad colectiva. Crisis de identidad, de dependencia, de distribución, de participación y de legitimidad del poder político se conjugan para dar cuenta de la magnitud de un proceso que reclama cambios de parte de la sociedad argentina en su conjunto (Almond, 1966; Pye, 1966; Waldmann, 1981). La crisis activa los nacionalismos económicos mundiales. Se realinea el mercado internacional y se fortalece el bilateralismo, las políticas deflacionistas persiguen la liquidación de *stocks*, los precios de los productos primarios se desploman, las quiebras se suceden, la desocupación se generaliza, se activa la polarización social y el Estado liberal entra en crisis.

La máxima inflexión de la crisis se da en la Argentina hacia 1932. Se anuncia la presencia del Estado keynesiano (1936) con su papel inductor, mientras el empirismo del *New Deal* de Roosevelt innova el ambiente estrictamente liberal estadounidense, en pro de la reactivación económica mediante el aumento de la demanda y el estímulo de la deflación bajo la regulación estatal. En una economía receptiva a los cambios de precios en el mercado mun-

dial y a las variaciones en el comercio internacional, con poca capacidad de consumo interno –como ocurre en el caso argentino y otros de Latinoamérica–, los mecanismos de transmisión de la crisis internacional, el viraje proteccionista y el establecimiento del régimen de preferencia imperial británico impactan en el modelo agroexportador (Thorp, 1984).

En la Argentina, la implementación del control de cambios en 1931 –reformado en 1933–, las mutaciones políticas internas y la depreciación de la moneda que acompaña al proceso de industrialización por sustitución de importaciones se conjugan con el fomento del bilateralismo comercial que alcanza su máxima expresión con la firma del Tratado Roca-Runciman en 1933 y el Acuerdo Anglo-Argentino de 1936, en medio del derrumbe del sistema multilateral de comercio y pagos. La mayor flexibilidad monetaria promueve la reforma bancaria de 1935, por la cual se crean el Banco Central de la República Argentina –con capitales mixtos– para fijar la emisión monetaria y la tasa de interés, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, destinado a movilizar los activos fijos. El Estado avanza en el subsidio a la economía agraria y con ese objetivo se crean, a partir de 1933, las juntas reguladoras de Granos, de Carnes, de Vinos, de Yerba Mate, de Azúcar y de Algodón. Sostener los precios de los productos del agro, evitando ventas apresuradas por la desvalorización de la moneda asegurando la rentabilidad del productor, forman parte de los propósitos esenciales de las medidas adoptadas (O'Connell, 1984).

La inflación afecta a la economía como producto de factores internos y

externos. La Argentina busca algunas respuestas en los críticos años de 1890 a pesar de las notorias diferencias entre una y otra crisis. Más allá de las distancias, los procesos críticos se repiten, como lo expone Raúl Prebisch, porque “no solo tenemos deudores. Constituímos asimismo un país esencialmente deudor y productor agrario, severamente golpeado por la baja de los precios internacionales” (Prebisch, 1934).

Pasado el primer trienio de la década de 1930, los precios de los cereales mejoran ante la sequía estadounidense. La recuperación de la economía argentina cobra fuerza; pero nuevamente la sombra de la recesión se proyecta a fines del decenio con motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Frente a un comercio mundial limitado y una creciente importancia del sector industrial, se busca restaurar la hegemonía agroexportadora. Esa intención se expresa en el Plan de Reactivación de la Economía Nacional presentado ante el Senado de la Nación en 1940. Es el primer documento de Estado donde se procura modificar, aunque sea parcialmente, la estrategia de desarrollo económico vigente, conciliando industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos y promoviendo la conformación de un mercado de capitales. Una propuesta tardía y vacilante, pero que atiende al mercado interno y procura anticiparse a los efectos de la posguerra. La confrontación política anula este desafío y frustra la aprobación del Plan (Llach, 1984; *Hechos e Ideas. Publicación de cuestiones políticas, económicas y sociales*, 1941). La política impone sus reglas a las decisiones económicas, que se ven así postergadas.

En la posguerra, las prósperas y estables condiciones del país ante una coyuntura internacional que le resulta favorable —especialmente hasta 1949— dan cuenta de las reformas socioeconómicas emprendidas primero desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y, luego, por la propia gestión gubernativa peronista, en favor de la redistribución del ingreso y sobre la base del diagnóstico efectuado por el Consejo Nacional de Posguerra. La propuesta de una “economía cerrada” —más discursiva que real— puesta al servicio de la doctrinaria “justicia social” se genera en las condiciones de un país acreedor, pero también como parte de una decisión política del Estado dirigista y planificador liderado por Juan Domingo Perón, que pone a la economía al servicio de amplios sectores de la sociedad. El mercado interno fortalecido por una política económica incluyente, basada en una nueva alianza de clases entre la pequeña y mediana burguesía industrial y los obreros, se convierte en el centro de la planificación económica quinquenal de 1947 (Girbal-Blacha, 2000; 2011).

La opción mercadointernista del peronismo avanza más allá de la sustitución de importaciones, afirmándose en controles de precios, un sistema financiero nacionalizado (desde 1946), mejoras sociales, crédito destinado a la producción y en el uso estratégico del sector agropecuario para dar impulso a la pequeña y mediana industria nacional, sin desamparar financieramente a los sectores económicos más tradicionales del país. Desde el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), la comercialización de los productos agrarios —monopolizada por este organismo autárquico desde 1946— permite promover

la industria argentina liviana con recursos genuinos, cuando la diferencia entre los altos precios internacionales agrícolas y los precios mínimos pagados al productor rural por el IAPI es derivada al sistema bancario nacionalizado y –a su vez– distribuido como crédito a la producción en condiciones ventajosas: con bajas tasas de interés y largos plazos de reintegro.

Hacia 1950 la coyuntura mundial cambia y se suma a las dificultades de implementación de algunas estrategias de la planificación quinquenal (1947-1951). La pendular “tercera posición” –sostenida en materia de política exterior por el peronismo– decae y el gobierno nacional recurre al capital externo para encauzar la economía. Una situación queda al descubierto, “la financiación subsidiada permitió el surgimiento y la capitalización (¿sobrecapitalización?) de una clase empresarial nacional, pero sin duda fue incapaz de establecer un mecanismo permanente de financiación a largo plazo” (Arnaudo, 1987, p. 163; Schvarzer, 1996, pp. 190-224; Seoane, 1998, pp. 29-88; Sidicaro, 1996). El campo se constituye –una vez más– en la alternativa para la reorientación económica del país, superando el deterioro en los términos del intercambio. Los proyectos de reforma agraria anunciados por el peronismo durante la campaña electoral y desde 1944 son una utopía. Se prolonga la política de suspensión de los desalojos de campos, manteniendo estables las propuestas del Estatuto del Peón (1944), mientras el IAPI revierte su función de fomento industrial para convertirse –con un fuerte endeudamiento con el sistema bancario oficial– en un organismo de subsidio al sector rural.

Dos malas cosechas consecutivas (1950-1951) frustran las expectativas

oficiales y en 1952 se produce el “*crack* del Estado de bienestar”. La inflación se hace presente en la economía argentina. Sin crédito internacional, “la Argentina solo podía pagar sus importaciones a través de sus exportaciones de materias primas”, según la opinión del ingeniero Jorge Schvarzer (*Clarín*, Suplemento Zona, 16/12/2001, p. 3); pero la producción agrícola aparece diezmada por la sequía. Resulta difícil la importación de insumos para seguir sosteniendo la industria nacional. En 1952, el flamante segundo gobierno de Perón aparece jaqueado por la crisis, que procura ser contrarrestada con el Plan de Emergencia Económica, redoblando la apuesta de la “vuelta al campo” (Presidencia de la Nación. Secretaría de Informaciones, 1952; Barsky y Gelman, 2001; Rougier, 2012). La consigna gubernamental dirigida al conjunto de la sociedad argentina es entonces producir y ahorrar más, consumiendo menos.

### **Tiempos de fragilidad y rupturas institucionales**

Desde 1955, el frágil equilibrio político acompaña la oscilante economía del país, con prolongados y cada vez más agudos períodos de crisis que fracturan a la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, más allá de la destitución del gobierno constitucional de Juan Perón. Se busca entonces la estabilización en los precios nominales, en medio de un proceso inflacionario que no cede. Se trata de una coyuntura a la cual no resulta ajena la intervención del Banco Central, para financiar el déficit fiscal. Al promediar la década de de 1950, la CEPAL (Di Tella y Zymel-

man, 1966; Díaz Alejandro, 1970; Ras, 1977; Gerchunoff y Llach, 1998; Neffa, 1998; Rapoport *et al.*, 2006; Girbal-Blacha, 2001), en su explicación sobre el estancamiento económico de América Latina, responsabiliza de ese efecto a la estructura de la propiedad de la tierra, mientras reclama el aumento de la producción agraria y el descenso en los costos de producción; propone como herramienta un uso mayor de la tecnología rural. En la década de 1960, los representantes de los grandes productores rurales, acusan a la política peronista de la descapitalización del agro y del estancamiento del campo, olvidándose de los ventajosos créditos recibidos.

No obstante, cualquiera sea el ángulo desde el cual se formulen los interrogantes, para 1962 una nueva crisis –más política que económica– afecta a la sociedad argentina, que no logra reconstituir su hegemonía y sufre los efectos perniciosos de una inflación en aumento desde 1959. La postura industrialista y proestatal, que brega por una fuerte entrada de capital externo y responde en gran medida al mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI), es un desafío para el presidente Arturo Frondizi, jaqueado por los militares y por el poder a distancia que ejerce Juan Perón desde el exilio (Portantiero, 1989; *Semanario de Información y Opinión. Noticias y protagonistas*, 31/10/1999, N° 109, sección Análisis).

La situación mundial durante la década de 1970 marca una nueva etapa crítica para países como la Argentina. Se frena drásticamente el crecimiento económico internacional y se emprende un ajuste para afrontar los reveses del sistema: el derrumbe del orden monetario de Bretton Woods, los bruscos

incrementos en los precios de los energéticos que se disparan desde los países de la OPEP, y el abrupto ascenso de las expectativas inflacionarias. Son estas variables, junto con los vaivenes de los mercados financieros mundiales y las balanzas de pagos, los que inciden en los términos del intercambio y obligan a cambiar los objetivos e instrumentos de la política económica en tiempos de Estado burocrático autoritario que despliega su accionar entre 1966 y 1973. El monetarismo y la economía ortodoxa devalúan la moneda nacional y Adalberto Krieger Vasena lidera este sector de la gestión de la Revolución Argentina, sin tener en cuenta a quienes viven de un salario y ocupan los escalones más bajos de la pirámide social. Prima la “teoría de los tiempos” (primero el económico, luego el social y por último el político) que alimentará el conflicto social y la crítica de los más diversos partidos políticos, que finalmente provocarían un desgaste de los hombres que lideraran este proceso gubernamental gestado de espaldas a la Constitución Nacional y sin legitimidad alguna.

Desde 1973 el flujo de capital hacia los países en desarrollo es creciente y fluido. Coexiste con una vertiginosa fuga de capitales nativos, que opera como un factor importante a la hora de sostener su crecimiento en forma de créditos bancarios a tasas de interés flotantes. En la Argentina los efectos de la coyuntura externa y de las políticas populistas aplicadas, así como la muerte de Juan D. Perón (el 1 de julio de 1974) y la falta de apoyo político intersectorial para con su sucesora en el cargo, la presidente María Estela Martínez de Perón, se unen a la puja con los sindicatos y se expresan en el llamado “rodrigazo”, cuando en junio



de 1975 la devaluación del peso licúa los salarios reales y promueve el 160% de inflación en el último semestre de ese año. Convulsión y estancamiento primero, endeudamiento después, y, finalmente, “desborde inflacionario y manifiesto retroceso en el proceso de crecimiento” terminan por afectar la producción y la distribución (Ferrer, 1981; Di Tella, 1986).

Para varios especialistas esta crisis se asocia a la política del ruralista José Alfredo Martínez de Hoz, quien desde 1976 orienta los planes económico-financieros del Proceso de Reorganización Nacional. El 20 de diciembre de 1978 “la tablita” sustenta la pauta cambiaria, sostenida en una devaluación decreciente como recurso antiinflacionario y acorde a los principios de la Ley de Inversiones Financieras del año anterior. Se origina una declinación en el cambio real (se devalúa por debajo del aumento en los precios mayoristas), se deteriora la competitividad, aumenta la necesidad de financiamiento externo y no puede restablecerse la confianza interna para sostener el crecimiento económico de la Argentina. En 1980 la quiebra del importante Banco de Intercambio Regional (BIR) es un síntoma incontrastable de la magnitud de la crisis que se aproxima dejando huellas indelebles en la sociedad argentina, que no logra reconstituir las bases de la hegemonía (opinión del economista Mario Damill, en *Clarín*, 16/12/2001, suplemento Zona, p. 3).

La situación cambia bruscamente en 1981, cuando a la fuga de capitales se añade la baja de los precios mundiales en dólares y las tasas reales de interés que aumentan sustancialmente. En 1982, mientras las tropas argentinas

ocupan las Islas Malvinas, el país se ve aislado del mercado de capitales como consecuencia del conflicto con Gran Bretaña. El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, gesta y lleva adelante sucesivas devaluaciones que, finalmente, empeoran la situación socioeconómica de los argentinos y amplían la brecha social. Mientras en 1978 la deuda externa (pública y privada) alcanzaba los 12.500 millones de dólares, en 1982 asciende a 40.700 millones de dólares (Maddison, 1988; Bekerman, 1988; opinión del economista Mario Damill, en *Clarín*, 16/12/2001, suplemento Zona, p. 3). Una vez más el Estado paga los costos del aumento en las deudas privadas, absorbiendo parte de las mismas, que se suman a la deuda pública. Nuevas normas y regulaciones rigen la acción del Banco Central para permitir este traspaso deudor que paga el conjunto de la sociedad argentina. La situación creada no es ajena a la estrategia de reestructuración de la misma, desplegada por el FMI y el Banco Mundial, conducentes a una caída en el flujo de capital desde 1981.

A pesar de los ajustes, la inflación no se detiene y se acrecienta la caída de la producción y el desempleo en toda Latinoamérica. La Argentina pasa por cuatro claras recesiones, que van más allá de la coyuntura internacional: 1974-1976, 1977-1978, 1980-1982 y la que se origina durante el retorno a la democracia con el fracaso del Plan Austral (1985). Los errores de la política interna generan parte de ese deterioro creciente. Entre 1973 y 1983 el crecimiento del producto bruto interno (PBI) es de solo el 0,6% anual promedio y el aumento medio de los precios del 166,5% anual. No son pocos los que opinan que “en el caso argentino, el error más costoso fue

la sobrevaluación extrema de la moneda en 1978-1981, que provocó una fuga masiva de capital” (Maddison, 1988; Cavallo y Doménech, 1988).

A una política monetaria y fiscal expansionista, aumentos salariales y controles de precios que caracterizan a la gestión peronista, le sucede desde 1976 el monetarismo friedmaniano en boga. La “restauración ortodoxa” conduce a una devaluación sustancial. Los salarios reales se reducen y se incrementa el déficit gubernamental, mientras se abandonan los precios regulados, se suprimen los subsidios y se adopta una política monetaria restrictiva, bajan los aranceles y se liberaliza el control de cambio. El “proyecto industrialista” es demolido y se inaugura un proceso de profundos cambios en la estructura productiva, junto a nuevos desequilibrios en las finanzas públicas y en el balance de pagos que genera mayor desigualdad social y deterioro laboral. La puja distributiva se acentúa y se localiza entre el sector de bienes y servicios y la actividad financiera. Los bancos extranjeros son cautelosos en el acuerdo de préstamos. La economía entra en una recesión profunda, con fuertes obligaciones de intereses y retrasos en el pago de la deuda externa, mientras la crisis de hegemonía se hace más aguda.

La transnacionalización de la agricultura, el estilo tecnológico pampeano adoptado en las economías del interior y la exportación de alimentos por los países desarrollados modifican ya desde los años setenta las tradicionales características del mercado y estrangulan las posibilidades habituales de los países agropecuarios para comercializar, con ventajas, sus productos. A esta coyuntura se agregan: la sofisticación financiera,

con la desregulación institucional, y la persistencia de la inflación. Más que en otras etapas históricas, la estabilización se asocia a la estabilidad de precios y no al buen nivel de actividad económica. El deterioro del sistema financiero diseñado en 1977 se acelera, la consolidación de las deudas empresarias y la liquidación de entidades financieras entre 1980-1981 son solo el principio de una solución precaria que el retorno a la democracia ocurrido en 1983 no podrá remontar fácilmente.

### ***El retorno a la democracia, el neoliberalismo, sus efectos. La crisis del 2001***

A fines de la década de 1980 un informe de la Universidad Argentina de la Empresa señala que “en los últimos sesenta años los indicadores estadísticos de la Argentina revelan, en comparación con los correspondientes al resto del mundo, un retroceso en el rango de importancia del país”, con excepción del sector agropecuario hasta mediados de los años noventa; se acentúa en los rubros industriales, consumo energético y comercio exterior, por las causas enunciadas y por las que se han añadido como producto del extraordinario endeudamiento externo y de la crisis de representatividad y gobernabilidad que ha padecido la Argentina durante el último medio siglo largo de su historia.

Entre 1983 y 1989, a pesar de haberse recuperado la ciudadanía, el retorno a las políticas keynesianas alienta la implementación de un programa ortodoxo de ajuste. La inflación acumulada es del 664.801% y la devaluación de la moneda respecto del dólar alcanza al

1.627.429%. El Plan Austral “identifica la inercia inflacionaria como la causa más importante del aumento sostenido de precios”. El ajuste heterodoxo y la deuda externa forman parte de los “dilemas del alfonsinismo” (Girbal-Blacha, 2001). En 1988, cuando los marginados sociales totalizan unos diez millones, la Argentina produce 6% menos que en 1983. No extraña entonces que se considere que “la del 80 es una década ‘perdida’ en términos de crecimiento” (*La Nación*, 23/04/1989, p. 22; 16/06/1989, p. 4; *Clarín*, 28/08/1989, p. 9).

Desde 1989 la situación empeora sensiblemente y la hiperinflación es el detonante que deriva en la crítica salida anticipada del presidente Raúl Alfonsín—heredero de los dilemas del Proceso de Reorganización Nacional— y el ascenso al Ejecutivo de la Nación de Carlos Menem, en julio de ese año. Durante los años ochenta y a costa de la pérdida sufrida por los trabajadores en el conjunto del ingreso nacional, “el Estado fue preso de los grupos económicos nacionales y extranjeros radicados en el país, y de los acreedores externos. Al capital concentrado interno, el Estado le transfirió, vía promociones industriales y estatización de la deuda externa, el 10 por ciento del PBI, y a los acreedores externos el 4 por ciento a través del pago de intereses de la deuda”. La tradicional tendencia a la concentración productiva en la región pampeana se hace más notoria. Mantener el buen nivel de rentabilidad y los saldos exportables crecientes son consignas ineludibles para capitalizarse y sostener la “inalterable alianza entre el Estado y el campo argentino” (Carlos Menem, 14/8/1993) si se quiere superar la recesión que afecta a la economía nacional. El sector agrario mejora los

rindes y la rentabilidad, aceptando el desafío de la hora (Girbal-Blacha, 2002; Rapoport *et al.*, 2006).

Ya a fines de 1991 el nuevo ministro de Economía Domingo F. Cavallo y sus colaboradores de la Fundación Mediterránea proponen el Plan de Convertibilidad, un verdadero programa de estabilización que no repara en los costos sociales a futuro. El Estado pasa a disciplinar a los actores económicos para que puedan ser competitivos a nivel mundial. Se fija por ley el tipo de cambio y se cubre en su totalidad la base monetaria. El sistema financiero se recupera y se procede a refinanciar la deuda externa. El capital nacional comienza a ser repatriado. En 1994 la coyuntura internacional deja al descubierto las debilidades del programa al producirse el alza en las tasas de interés estadounidenses, mientras el sistema financiero se concentra en beneficio de la banca extranjera. La respuesta gubernamental se da mediante privatizaciones y reducción de gastos, especialmente en las provincias. Una nueva alianza de clases cobra cuerpo y el menemismo se aproxima a la alta burguesía argentina y al capital externo (especialmente de los Estados Unidos). Desocupación, pobreza y marginalidad son los rasgos de la otra cara de la Argentina, cuando el modelo liberal menemista muestra sus limitaciones más agudas.

La conciliación de intereses entre grupos económicos nacionales y acreedores externos forma parte de la estrategia menemista y se explicita en los consorcios que se adjudican las principales privatizaciones (opinión del economista Martín Schorr, en *Clarín*, 16/12/2001, suplemento Zona, p. 3). El gobierno deja crecer su endeudamiento para mi-

tigar la fuga de capitales y solo atiende intereses parciales –los más poderosos– de la sociedad argentina, que sufre un saqueo casi permanente de sus aspiraciones, alejadas de mecanismos básicos para el ascenso social, como la educación y el trabajo. La identidad nacional está en juego en medio de la anestesia que adormece a la sociedad argentina y a la memoria colectiva.

El retorno de los radicales aliados a un espectro político más amplio impone –en el filo del nuevo siglo– la figura de Fernando de la Rúa para conducir los destinos de la República Argentina, pero en su gestión no atina a dar cumplimiento a su programa electoral y pierde con inusual celeridad el consenso que lo llevara a ocupar la primera magistratura. Los vaivenes y postergaciones propios de su estilo político lo conducen hacia profundas contradicciones no solo en el campo de la política, sino de la economía. La Alianza que diera sustento a su gobierno, se fractura y colapsa. El alejamiento de su vicepresidente Carlos Álvarez, primero, el deterioro de su prestigio casi al mismo tiempo, y por último, la debacle financiera que acorralara e incautara los ahorros de los argentinos y redujera el 13% los salarios de los empleados públicos lo sumen en una profunda soledad e impulsan rápidamente su renuncia, en medio de una sociedad que vuelve a ser objeto de la violencia, ahora en un contexto democrático (Rapoport *et al.*, 2006). Nuevamente, la identidad y la memoria de los argentinos son puestas a prueba.

Tras la salida del presidente De la Rúa, la falta de hegemonía y las dificultades para asegurar la gobernabilidad de la nación Argentina quedan al desnudo. La sociedad advierte sobre el

desprestigio de la dirigencia política en una Argentina huérfana de liderazgos, descreída, escéptica, fragmentada en sus bases, con casi el 50% de su población sumida en la pobreza, un desempleo superior al 25% y altos niveles de marginalidad que hacen temer por la disolución social. Se alienta la esperanza de un gobierno democrático de transición, capaz de devolver la esperanza y la certidumbre a una sociedad fracturada y empobrecida, que no se resigna a perder su desarticulada identidad nacional, embanderándose por un breve tiempo tras el lema “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, que procuraba dar consistencia a la protesta de los sectores bajos y medios de la sociedad argentina, al reclamar “que se vayan todos”, en directa alusión a la clase política dirigente.

El acoso de la deuda externa es grande y pesado. Conspira contra la economía y el empleo nacional; pero mayor aún es el desprestigio de la clase política, la desconfianza, la pérdida de valores, la ausencia de un mercado interno de capitales y la desarticulación de la función social y económica que todo sistema financiero debe cumplir, y que comienza a estar ausente en esta “Argentina del vidrio y el cartón”, de los cuales vive gran parte de su población subempleada o sin trabajo.

Hacia mediados del 2001 los medios periodísticos advertían que “la gran depresión económica devora la política, sacude la vida de la gente” y la Argentina se debate, acuñando expresiones como “este país no existe”, parafraseando al politólogo francés Alain Touraine que se refería a la existencia de los argentinos al mismo tiempo que ponía en duda la existencia de la Argentina como nación (Teubal, 2011; *Clarín*, 3/6/2001,

suplemento Zona). Una cuestión de identidad es lo que se debate y en esta discusión hay ganadores y perdedores, porque hay incluidos y excluidos. La lógica del mercado suplanta a la del Estado que adquiere expresiones mínimas; que está ausente.

En enero de 2002 –después de pasar por un largo período de sostenida convertibilidad– se produce la temida devaluación, pero en esta ocasión se pasa de una economía dolarizada a una pesificada, que deja caer todo el peso de sus efectos negativos en los sectores asalariados de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, se suspende el pago de la deuda externa, el patrimonio personal y nacional resulta afectado por la interferencia estatal en los contratos acordados entre ahorristas y entidades financieras, provocando una aguda crisis de confianza que se extiende “a la moneda, al sistema financiero y a los contratos, resultando en una notable caída de la actividad económica” (Cortés Conde, 2002, p. 5). En todos los casos, los cambios erráticos de la política económica reflejan tanto la presión externa como la ambigüedad y desarticulación de las decisiones políticas internas, que no son ajenas a la inestabilidad a veces explícita y otras, encubierta, en que vive desde hace años la sociedad argentina (Gálvez, 2011).

La crisis de estancamiento es el revés de la trama de la frustrada “revolución productiva”. Las circunstancias sociopolíticas son diferentes a períodos anteriores de nuestra historia. Desde la devaluación, la canasta básica de alimentos crece casi el 35%. Se produce un aumento extraordinario y constante en el número de argentinos que viven bajo la línea de pobreza extrema, que alcanza en el 2002 a 6,5 millones de personas,

es decir, el 17,8% de la población total. El hambre acompaña a esta parte de la sociedad a pesar de ser la Argentina uno de los principales países proveedores de alimentos en el mundo (Bekerman y Monti Hughes, 2012).

Al mismo tiempo, y cuando Néstor Kirchner –con escaso caudal electoral– se hace cargo del Ejecutivo Nacional, la Argentina agrícola se ajusta a las exigencias coyunturales pero no rompe los lazos con sus orígenes. De ellos conserva vigente la tradicional importancia de la producción típica de la pampa húmeda, aunque ahora asociada al avance tecnológico y a mayores niveles de eficiencia, dependiendo progresivamente del cultivo de la soja que ocupa alrededor del 50% de la superficie total cultivada. También expresa continuidad en la permanencia de corporaciones agrarias constituidas en el siglo XIX o en los albores del XX, que suman su acción al de otras más nuevas, formadas como parte de la adecuación del sector rural a las condiciones de modernización y globalización imperantes (Trigo *et al.*, 2002; Rapoport *et al.*, 2006).

La competencia por la provisión de los mercados se acentúa. Nuestro país se ve obligado a ser creativo y aumentar la eficiencia agraria, mientras brega por reducir el proteccionismo internacional (Regunaga *et al.*, 2003). Busca, una vez más, el apoyo oficial; pero los tiempos han cambiado aun para los omnipresentes sectores rurales. La cercanía a los tiempos del bicentenario obliga a un balance (Fernández Bugna y Porta, 2008).

La alineación de los precios internos con los internacionales deja sentir sus efectos en una coyuntura de salarios estancados o en descenso como consecuencia de la desocupación. El sector

agropecuario (productores, proveedores de insumos y agentes de comercialización) “se apropian de beneficios extraordinarios” a pesar del aumento de los insumos. De ahí que la decisión de implantar impuestos a las exportaciones agrarias se convierta en un elemento sustantivo para contribuir a generar la reclamada equidad social; para lograr revertir la “geografía del hambre”, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que 3 de cada 10 niños argentinos (es decir, 2,7 millones) no reciben las calorías necesarias para un desarrollo normal (Arceo, 2011; *Clarín*, 28/5/2002, p. 8; *Página/12*, 24/5/2002, nota Cristian Alarcón). El informe 2003 de la CEPAL, por su parte, sostiene que América Latina no logra reducir la pobreza. En el último lustro los pobres aumentaron de 200 a 225 millones y un centenar de ellos viven en la indigencia. Argentina, Colombia y Venezuela encabezan esta triste estadística que condiciona la tan ansiada “sociedad global para el desarrollo” (*La Nación*, 30/11/12, sección Enfoques, p. 1). Por entonces la Corte Suprema de Justicia ordena al Estado asistir a los aborígenes chaqueños, cuando se registran casi una docena de muertes por desnutrición, poniendo en juego el derecho a la vida. Así asumía el Ejecutivo Nacional el santacruceño Néstor Kirchner, en medio de este complejo panorama nacional.

Se advierte como necesaria y urgente una política integral de recuperación del aparato productivo y de crecimiento del empleo como parte de una estrategia para ser ejecutada en beneficio de una salida exitosa de la crisis, que –sin duda– también obliga a refundar el sistema político para que pueda recuperar su legitimidad, asegu-

rando instrumentos fuertes de control y participación ciudadana en todos los niveles que mejoren la implementación de políticas públicas y aseguren un régimen de financiamiento de la actividad política con un control efectivo y sanciones reales, sabiendo que “las ideas existen y tienen poder” (*Clarín*, 17/4/2002, p. 6; Badiou, 2003, p. 4). La alta tasa de crecimiento del PBI en la capital y las provincias patagónicas no implica una más equitativa redistribución del ingreso.

Más allá de los efectos de la abrupta crisis del 2001, la clase media opera como un imán para los argentinos, que se perciben como tales más allá de la realidad que afrontan, medida cuantitativamente. En julio del 2006 el INDEC indicaba que más allá del control de la crisis, en la Argentina los más ricos ganan 36 veces más que los más pobres; una mejoría sin duda si se lo compara con el 2003 cuando esa diferencia era de 56 veces. El dilema del trabajo en el país vincula un “alto crecimiento con bajos salarios”, que reconocen su historia desde tres décadas atrás (*Le Monde Diplomatique*, Buenos Aires, julio de 2006, año VIII, Nº 85). Productividad, empleo y bienestar no se corresponden a la hora de plantear una historia política del trabajo. La historia da cuenta de estos desequilibrios.

Las grandes y tradicionales corporaciones, como la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, saben de la importancia de sus orígenes y hacen uso del pasado a la hora de justificar sus raíces y sus reclamos ante el Estado, aunque ya no tengan el poder que históricamente tenían, por la importancia de los inversores extranjeros en nuestro medio rural. Ocurría en julio del 2006, cuando “el gobierno dejó sin funcio-

narios la inauguración de La Rural”, es decir, la Exposición que anualmente se reúne en Palermo y que viviría –entonces– una situación inédita en 120 años de la muestra (*Clarín*, 30/7/2006, p. 3). El Estado nacional dejaba expuesta su resistencia a los reclamos de este poderoso sector del campo explicitando la tensión existente. Aunque el titular de la entidad, fiel al estilo corporativo, evitaba confrontar apelando casi al final de sus palabras inaugurales al diálogo, el discurso que leyó (de los dos que había llevado preparados) se iniciaba con largos párrafos dichos en 1875, en la primera Exposición Rural, por un funcionario del por entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda. Así, ponía de manifiesto la ausencia oficial y una situación inocultable: que en la Argentina, históricamente, el agro no podía ser omitido por el poder político (*Clarín*, 30/7/2006, p. 3). Los números del campo indicaban que el 54,05% de la superficie plantada y la mayor inversión por hectárea correspondían a la soja, seguida de lejos por el trigo (15,93%) y el maíz (14,08%) (*Clarín*, 7/3/2006, p. 17). Una situación que se ha mantenido en el tiempo.

En febrero de 2007 la ampliación de subsidios alcanzaría también –más allá del discurso– a los sectores del agro. Una sustancial mejora en la refinanciación de los pasivos de unos 4.500 productores rurales y los ajustes en los precios de las carnes son una respuesta contundente desde el gobierno a los pedidos del agro (*Infobae.com*, 9/2/2007). Los productores insisten en los precios diferenciados, que distinga entre la exportación y quienes surten al mercado local. Las compensaciones estatales al sector se postulan como la salida más

oportuna (*Clarín*, 10/3/2007, p. 24; 31/3/2007, pp. 3-4).

El pasado y el presente suelen mostrar continuidades, además de algunas fracturas. Uno de los ejemplos lo constituye el agro argentino, que da muestras irrefutables de las permanencias que el discurso, los gestos, las acciones y aun las imágenes registran como parte de una misma ecuación en el concierto nacional vigente, aquella que vincula el agro y la política. El primero aparece enlazado en los últimos años a la sociedad del conocimiento, cuando –por ejemplo– el ingeniero agrónomo de Carlos Casares y uno de los mayores empresarios de la soja, Gustavo Grobocopatel, que trabaja unas 110.000 hectáreas en Argentina, Uruguay y Paraguay, resultara elegido por Harvard, en el 2007, como “uno de los casos de negocios del año” (*Clarín*, 6/4/2007, p. 19), producto de su vinculación a la tecnología de alto nivel (*Clarín*, 17/3/2007, sección Rural).

A fines del 2007 el gobierno sostiene las retenciones a las exportaciones y establece nuevas alícuotas: 35% para la soja, 28% para el trigo y 25% para el maíz (*Clarín*, 10/11/2007, sección Rural, p. 2). Agronegocios, bicombustibles, engorde de ganado a granos, cultivo de soja sobre rastrojo de maíz, mejora del trigo y el maíz en el Norte Argentino, tanto como los cultivos asociados, son desafíos incluidos en la agenda pública del oficialismo hasta hoy (Brieva, 2007).

### **De “la profundización” del modelo a “la sintonía fina” (2007-2011)**

Por primera vez, en octubre de 2007 una mujer resultaría electa presidenta de los argentinos con el 43,9% de los vo-

tos. Cristina Fernández de Kirchner se impuso por más de 20 puntos a quien la siguiera en número de votos, Elisa Carrió (21,6%). El triunfo impactante del kirchnerismo, que solo fue derrotado en San Luis, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iría de la mano de la candidata triunfante y con su auxilio ganaron casi todos los intendentes del conurbano bonaerense (430 boletas en los 134 municipios bonaerenses fueron aliadas del Frente para la Victoria). Para el oficialismo y para el empresariado –que se satisfacen por la continuidad del modelo K– la noticia resulta auspiciosa, aunque no siempre lo sea para la confrontación de ideas y proyectos propios de un país republicano. El kirchnerismo domina el Congreso Nacional (*Clarín*, 29/10/2007, pp. 38-39) y los porcentuales de votos superan el 70% en aquellas provincias donde el clientelismo político, la pobreza y la marginalidad tienen los valores más altos (Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero) y también donde el matrimonio Kirchner se lanzara a la arena política, Santa Cruz (en la Patagonia Austral) (*Clarín*, 29/10/2007, pp. 38-39).

Se retoma en gran parte la retórica que permitiera superar los efectos del 2001, para “reconstruir el capitalismo nacional”, apostar al equilibrio fiscal y profundizar la política que sostiene un Estado reparador de las desigualdades sociales procurando trascender los planes de ayuda social. La concentración del ingreso conspira contra los objetivos de inclusión, pero la decisión es reforzar el modelo de inclusión que se sostiene desde el discurso.

En el horizonte de entonces se presenta un dólar que deja de ser la moneda codiciada a nivel mundial aunque lo siga siendo para los argentinos, el costo salarial de la industria cae el 20% en los últi-

mos 10 años respecto de la productividad y la suba de precios (según el Ministerio de Economía), pero también se destaca un récord agrícola que supera los 92 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, aun en medio de las tensas relaciones con la tradicional Sociedad Rural Argentina, que ve decrecer su poder político, que radica ahora en otras corporaciones menos tradicionales, más tecnológicas y asociadas a la innovación productiva.

El desafío de esos momentos, y también del actual –cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido reelecta, en octubre del 2011, con el 54% de los votos–, es reconstruir el Estado y redistribuir el ingreso que ha crecido en términos absolutos desde la crisis del 2001 en más del 43%. El discurso oficial llama –al mejor estilo peronista– a conciliar empresariado y trabajadores; es decir, a una cooperación entre el capital y el trabajo, para especial satisfacción del primero. Así lo expresaba ya el entonces titular del Ejecutivo Nacional en el encuentro de septiembre de 2007 con las 340 empresas que más facturan en el país (*Clarín*, 10/9/2007, p. 10) y lo ha vuelto a plantear en noviembre de 2011 la actual presidenta de la República. Se registran, según estadísticas del INDEC y cuando los instrumentos técnicos tradicionales son insuficientes para medir las nuevas expresiones de la marginalidad y la pobreza, 10 millones de pobres e indigentes en una nación de 40 millones de habitantes; esperan una mayor equidad social, que el Ejecutivo coloca en el centro de su discurso y sus acciones de asistencia social.

Hoy, cuando la soja pone en el tapete de las discusiones los beneficios y perjuicios de un cultivo que concentrado en pocas manos separa a los dueños del



suelo de los productores y exportadores, de espaldas a las repercusiones ambientales y ecológicas; cuando la ganadería argentina sufre el impacto de los cambios en la demanda externa y en la dieta de argentinos y extranjeros; cuando las inundaciones o sequías han obligado a reorientar la producción agraria; cuando los bajos precios pagados por la producción lechera atrofia el sector, el campo –de la mano de la tecnología– sigue siendo una opción imprescindible para la economía nacional (Ferrer, 2008; *Clarín. Revista rural*, junio-julio de 2008, N° 4). Los pequeños y medianos agricultores, finalmente excluidos de algunos beneficios que planteara el proyecto corregido, que durante 2008 presentara el Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación, y que culminara en la abortada resolución 125, coronó con mayores retenciones a las exportaciones agrarias pero también desdobló las cargas conforme al rango del productor. La soja se convertía en “la gran apuesta del año 2009” (Asiain, 2008; *Clarín. Revista rural*, agosto-septiembre de 2009, N° 11) y también de estos tiempos del bicentenario. De cualquier modo, la Argentina rural parece distinguir jerárquica y definitivamente la agricultura familiar de los agronegocios a los cuales apuesta como uno de los pilares de su política económica, más allá del discurso (Gras y Hernández, 2009; Corti, 2009).

La “sintonía fina” se impone como parte de esa estrategia discursiva que augura consideraciones sobre la posibilidad de financiación del Estado, el destino de los gastos y la acumulación de reservas del Banco Central, sabiendo que el modelo posconvertibilidad se sostiene en los saldos positivos de las cuentas fiscales y con un tipo de cambio real que resulte

competitivo y evite la fuga de capitales, así como en el superávit comercial.

### 3. Reflexiones finales desde la historia

Desde la Primera Guerra Mundial –es decir casi desde el centenario– los economistas dan cuenta de 18 ciclos recesivos en el país, con una duración que nunca supera los tres años. En el 2001, con la pesada herencia de un período de recesión profunda y un índice de desempleo que rondaba el 23% (a diferencia del 8% registrado en la década de 1930), en “los espejos históricos de la crisis argentina” (Vitelli, 2009; *Clarín*, 28/4/2002, p. 6), aparece –con los inicios de este siglo XXI– la imagen de una nación sumida en un deterioro profundo, en medio de una completa orfandad internacional, default público y privado, sistema financiero quebrado y problemas institucionales agudos. Resultaba insuficiente pensar que con políticas ortodoxas la crisis podría superarse, pero la obstinación de la dirigencia argentina parece no tener límites. La crisis del 2001 fue un duro llamado a la realidad y una apelación a la memoria colectiva y a la necesidad de reconstituir la identidad nacional.

Las circunstancias no son siempre las mismas, pero la coherencia de los argentinos para con las crisis recurrentes, cada vez más graves, y para con el empleo de recetas repetitivas que técnicamente aplicadas no se sostienen en el mediano y en el largo plazo, permiten reconocer similitudes y diferencias en los procesos más agudos de las crisis argentinas del último siglo, así como la importancia de un análisis histórico preciso para poder elaborar un diagnóstico de situaciones

más o menos recientes. Mientras que en 1890 la crisis es monetaria y fiscal, en 1930 la caída del comercio mundial produce una baja en los ingresos fiscales y obliga a salir de la convertibilidad establecida en 1899 (1\$ papel = 0,44\$ oro). La devaluación permite una expansión monetaria y un aumento del gasto, pero se continúan pagando las obligaciones externas. La confianza no resulta alterada en su esencia y no se genera salida masiva de dinero. Mientras esta crisis se origina en los países centrales, la de la década de 1970 se inicia en los países productores de petróleo (OPEP) y sus efectos se dejan sentir en todo el mundo. En la década de 1930 quien paga las consecuencias de la crisis es toda la sociedad argentina, que avanza entre la realidad y el desconcierto. En los inicios del decenio de 1980 lo hacen los depositantes del sistema financiero. Los resultados también son distintos. En los años treinta la confianza en el sistema no se deteriora, las tasas nominales de interés las fija el mercado y el grado de monetización de la economía no se altera.

En 1982 la estadística indica que el sistema financiero queda en estado crítico, se subsidia a los deudores mediante tasas nominales de interés inferiores a la inflación y se reduce drásticamente el grado de monetización de nuestra economía (Arnaudo, 1987, pp. 137-171; Cibils y Allami, 2010). La eficiencia social del sistema financiero argentino se deteriora profundamente y sus consecuencias son difíciles de superar. La intermediación financiera requiere cada vez con más asiduidad recursos crecientes que están alejados de la producción de bienes y servicios; y como estas actividades han generado altos beneficios individuales sin tener en cuenta la productividad social, sus

consecuencias han sido la especulación, las marchas y contramarchas en las políticas implementadas, la caída del poder adquisitivo, el desconcierto, una moneda argentina en terapia intensiva y descalificada por la invasión de bonos provinciales y nacionales, una importante deuda interna y externa, ruptura en la cadena productiva y un proceso inflacionario que sume en el pesimismo a la sociedad argentina. La productividad negativa del sector público y una acotada capacidad real de pago completan un complejo panorama que deteriora de manera sostenida el PBI (*Semanario de Información y Opinión. Noticias y protagonistas*, 4/7/1999, N° 92, sección Debates). No se trata solo de efectos negativos en las finanzas; las repercusiones sociales son aún mayores y la incertidumbre acompaña la cotidianidad de los argentinos.

Más allá de los cambios institucionales, políticos, financieros y sociales, la continuidad entre el pretérito y el presente de la Argentina puede construirse históricamente desde la perspectiva rural, por ejemplo, haciendo un simple repaso de los hitos fundamentales que jalonan el itinerario pasado. La memoria debe nutrirse de ellos para dar consistencia a este “modelo para armar” del país, en el cual algunas fortunas personales o sectoriales se salvaguardan, se acrecientan, y no pocas economías regionales se empobrecen. La dirigencia argentina se enlaza con el modelo de país agroexportador en sus distintos rangos y grados de evolución; se nutre de sus ganancias, pero no siempre reinvierte en las regiones de las cuales extrae los beneficios. El rastreo de este pasado es importante para poder comprender por qué un país que figura en los primeros rangos como productor

internacional de alimentos tiene al 30% de su población en el límite de la línea de pobreza y a un alto porcentaje de sus niños con serios problemas de desnutrición, más allá de la política de asistencia social propiciada desde el ámbito público para los sectores poblacionales que sufren mayores carencias.

Al mismo tiempo, en una Argentina donde la educación y el trabajo han perdido gran parte de su significado como instrumentos para el ascenso social, podría decirse que es la adecuación a los tiempos el perfil que con mayor claridad muestra al sector agrario y agroindustrial como un elemento dinámico de nuestra economía, que presenta dificultades para exportar productos con mayor valor agregado. La reconstrucción del país –que progresivamente se lleva a cabo desde el 2003– es necesaria para encontrar nuevos rumbos, preservar valiosas continuidades y corregir errores fundamentales que permitan promover y ejecutar auténticas políticas de estado; políticas que, como señalara Arturo Jauretche hace más de medio siglo atrás, permitan “profesar una ortodoxia para con los mandatos de la realidad, que suelen contrastar con las ortodoxias doctrinarias” (citado en Girbal-Blacha, 1993).

El desafío actual es entender la cuestión socioeconómica en perspectiva, cuando se piensa en la “bio” Argentina asociada a los combustibles, para poder caracterizar la complejidad del mundo económico, su heterogeneidad con una creciente aproximación al quehacer científico-tecnológico como parte de sus negocios, pero también debe rescatar sus continuidades, su coherencia para con las alianzas entre el agro, la industria asociado a él –que hoy profesionaliza la

gestión– y los gobiernos de turno (Toledo López, 2010; *Clarín. Revista rural*, diciembre 2009-enero 2010, N° 13).

A las puertas de los bicentenarios, la Argentina muestra aun una gran concentración de la renta frente a una reducción del trabajo, especialmente en el campo, que vive un avance tecnológico significativo pero también un empobrecimiento que recae sobre las atenuadas ganancias de los pequeños y medianos productores, que dieran consistencia hasta los albores del siglo XX –aunque con actores diferentes– a la “revolución en las pampas” (Scobie, 1968). Más allá de 2010 y rumbo a 2016, el sector tiene por lo menos tres asignaturas pendientes: el acuerdo entre lo público y lo privado, las políticas de largo plazo y la institucionalización del mercado (Michelena, 2009; *Clarín*, 7/7/2007, sección Rural, p. 24). El reto no puede emprenderse de espaldas a la historia y a la memoria. Por estas razones, la reflexión histórica basada en la generación de conocimiento para dar consistencia a la democracia en acción, vinculada al ejercicio pleno de la ciudadanía y la equidad social, merece ser jerarquizada desde los sectores dirigentes y por la sociedad en su conjunto.

En esta coyuntura, los científicos sociales y particularmente los historiadores procuramos contribuir a la comprensión de los problemas, efectuar diagnósticos y proponer alternativas frente a las cuestiones que contribuyen a promover la disolución social. Es importante destacar “los usos de la historia en la toma de decisiones”, en tanto “guías para la acción”, es decir, como parte de la recreación de la función del historiador en la formulación de las políticas públicas (Neustad y May, 1986; Carrera Damas, 1989, p. 9) y de un auténtico “revisionismo” histórico.

La sociedad argentina está acostumbrada al paternalismo, porque el sector dirigente no ha desempeñado eficazmente su papel, “siendo capaz de servirse, sirviendo al desarrollo nacional”. Todavía se piensa –en varios ámbitos– que los precios de los granos o de la soja “son la mejor defensa para enfrentar la crisis” (*Clarín*, 11/8/2007, p. 32). Es preciso entender la política como forma de mediación en una sociedad para advertir y reconocer que el país ha cambiado y que “no será posible crecer sin estabilidad ni derrotar la inflación sin crecimiento” (Sidicaro, 2003; *La Nación*, 18/6/1989, pp. 1-2; *Página/12*, 10/8/1989, p. 3; *Clari-*

*án*, 8/8/1989, pp. 2-3; 3/9/1989, suplemento Económico, p. 10; Ferrer, 1981, p. 119; *Clarín*, 14/9/1989, sección Cultura y Nación, p. 5; *La Nación*, 27/7/2003, sección Enfoques, p. 1), especialmente cuando el descenso de la pobreza no implica una menor desigualdad social, como lo explicita el propio discurso oficial, cuando se hace cargo de las deudas pendientes. En este sentido y reconociendo que “no hay identidad social ni individual sin memoria” (Jelin, 2003, p. 35), el análisis histórico y la preservación de la memoria pueden sugerir nexos de continuidad pero también convertirse en claves para el cambio.

## Referencias bibliográficas

- Almond, Gabriel A. (1966), “Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics”, en Coleman, James S. (1966), *The Politics of the Developing Areas*, Princeton.
- Arceo, Nicolás (2011), “Consolidación de la expansión agrícola en la posconvertibilidad”, *Realidad Económica*, 257, enero-febrero, pp. 28-55.
- Arnaudo, Aldo (1987), *Cincuenta años de política financiera argentina (1934-1983)*, Buenos Aires, El Ateneo.
- Asiain, Andrés (2008), “Re-tensiones a la exportación. Más allá de la cuestión fiscal”, *Realidad Económica*, 236, mayo-junio, pp. 8-29.
- Badiou, Alain (2003), “Alain Badiou: ‘Las ideas existen y tienen poder’” (entrevista), *La Nación*, 30/11/2003.
- Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman (2001), *Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, caps. VIII y IX.
- Bedarida, François (1999), “L’Histoire. Entre Science et Mémoire?”, en Ruano-Borbalan, Jean-Claude (1999), *L’histoire aujourd’hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien*, París, Editions Sciences Humaines, pp. 335-342.
- Bekerman, Marta (1988), “Los flujos de capital hacia América Latina y la reestructuración de las economías centrales”, *Desarrollo Económico*, 111, vol. 28, octubre-diciembre.
- y Nicolás Monti Hughes (2012), “Estrategias inclusivas en la lucha contra la pobreza”, *Realidad Económica*, 254, agosto-septiembre, pp. 63-81.
- Blacha, Luis Ernesto (2005a), “¿Élite o clase política? Algunas precisiones terminológicas”, *Theomai/Theomai Journal*, 12, revista electrónica en línea, segundo semestre, <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12401210>>, consultado el 27 de junio de 2012.
- (2005b), “Los individuos en el contexto de la flexibilidad de la red como forma de organización”, *Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados*, 17, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba/CEA, pp. 119-137.

- Botana, Natalio (1979), *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Brieva, Susana (2007), *Dinámica sociotécnica de la producción agrícola en países periféricos: configuración y reconfiguración tecnológica en la producción de semillas de trigo y soja en Argentina, desde 1970 a la actualidad*, Buenos Aires, FLACSO.
- Carcano, Miguel Ángel (1977), *Sáenz Peña. La revolución por los comicios*, 2ª edición, Buenos Aires, Eudeba.
- Carrera Damas, Germán (1989), “El papel del historiador en la formulación de políticas públicas”, *CLAH, Newsletter*, 1, vol. 25, abril.
- Cavallo, Domingo y Roberto Doménech (1988), “Las políticas macroeconómicas y el tipo de cambio real. Argentina, 1913-1984”, *Desarrollo Económico*, 111, vol. 28, octubre-diciembre, pp. 375-400.
- Cibils, Alan y Cecilia Allami (2010), “El sistema financiero argentino desde la reforma de 1977 hasta la actualidad”, *Realidad Económica*, 249, enero-febrero, pp. 107-133.
- Cortés Conde, Roberto (1989), *Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana/Instituto Di Tella.
- (1997), *La economía argentina en el largo plazo. Ensayos de historia económica de los siglos XIX y XX*, Buenos Aires, Sudamericana.
- (2002), “La salida de la convertibilidad en otras crisis argentinas”, *La Nación*, 15/3.
- Corti, Arístides Horacio M. (2009), “Retenciones a la exportación de productos agrícolas”, *Realidad Económica*, 247, octubre-noviembre, pp. 62-72.
- Díaz Alejandro, Carlos (1970), *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press (en castellano: *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu, 1975).
- Di Tella, Guido (1986), “La estrategia del desarrollo indirecto veinte años después”, *Desarrollo Económico*, 101, vol. 26, abril-junio.
- y Manuel Zymelman (1966), “Etapas del desarrollo económico argentino”, en Di Tella, Torcuato S. et al. (1966), *Argentina, sociedad de masas*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 177-195.
- Di Tella, Torcuato S. et al. (2006), *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*, Buenos Aires, Ariel, pp. 346-353.
- Fernández Bugna, Cecilia y Fernando Porta (2008), “El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural”, *Realidad Económica*, 233, enero-febrero, pp. 17-48.
- Ferrari, Gustavo (1978), *Apogeo y crisis del liberalismo 1886-1890*, Buenos Aires, La Bastilla.
- Duncan, Tim (1983), “La política fiscal durante el gobierno de Juárez Celman, 1886-1890. Una audaz estrategia financiera internacional”, *Desarrollo Económico*, 89, vol. 23, abril-junio, pp. 11-34.
- Ferrer, Aldo (1981), *El devenir de una ilusión. La industria argentina desde 1930 hasta nuestros días*, Buenos Aires, Sudamericana.
- (2008), “La Argentina en el mundo que se viene”, *Realidad Económica*, 240, noviembre-diciembre, pp. 7-28.
- Gálvez, Eduardo (2011), “Las ideas económicas dominantes en la clase dominante argentina a fines del siglo XX (1989-2001)”, *Realidad Económica*, 258, febrero-marzo, pp. 14-36.
- Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach (1998), *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Ariel, cap. 5.
- Girbal-Blacha, Noemí M. (1982), *Historia de la agricultura argentina a fines del siglo XIX (1890-1900)*, Buenos Aires, FECIC.
- (1988), *Estado, chacareros y terratenientes (1916-1930)*, Buenos Aires, CEAL.

- (1993), *Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del Doctor Arturo Jauretche (1946-1950)*, Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires.
- (2000), “Acerca de la vigencia de la Argentina agropecuaria. Estado y crédito al agro durante la gestión peronista (1946-1955)”, *The Americas*, vol. 3, N° 56, enero, pp. 77-102.
- (coord.), Zarrilli, Adrián G. y Balsa, Juan J. (2001), *Estado, sociedad y economía en la Argentina 1930-1997*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, cap. 5.
- (2002), “Las crisis en la Argentina. Juicio a la memoria y la identidad nacional. Reflexiones desde la perspectiva histórica”, *Theomai*, número especial, invierno, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 9-28.
- (2011) [2003], *Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas*, 1ª reimpr., Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
- Gras, Carla y Valeria Hernández (coords.) (2009), *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*, Buenos Aires, Biblos.
- Halperin Donghi, Tulio (1984), “Canción de otoño en primavera: previsiones sobre la crisis de la agricultura cerealera argentina (1894-1930)”, *Desarrollo Económico*, 95, vol. 24, octubre-diciembre, pp. 368-386.
- Hechos e Ideas. Publicación de cuestiones políticas, económicas y sociales* (1941), t. X, N° 38-39, Buenos Aires, enero, edición dedicada al estudio de la recuperación de la economía nacional.
- Hobsbawm, Eric J. (1972), “The Social Function of the Past: Some Questions”, *Past and Present*, N° 55, pp. 3-17.
- Jelin, Elizabeth (2003), “No hay identidad social ni individual sin memoria” (entrevista), *Clarín*, 9/11/2003.
- Le Goff, Jacques (1988), *Histoire et mémoire*, París, Gallimard.
- Llach, Juan José (1984), “El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo”, *Desarrollo Económico*, 92, vol. 23, enero-marzo, pp. 515-558.
- Maddison, Angus (1988), *Dos crisis: América y Asia 1929-1938-1983*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Marichal, Carlos (1988), *Historia de la deuda externa de América Latina*, Madrid, Alianza.
- McGann, Thomas (1965), *Argentina, Estados Unidos y el Sistema Interamericano 1880-1914*, Buenos Aires, Eudeba.
- Michelena, Gabriel (2009), “La evolución de la tasa de ganancia en la Argentina (1960-2007): caída y recuperación”, *Realidad Económica*, 248, noviembre-diciembre, pp. 83-106.
- Namer, Gerard (1999), “Les cadres sociaux de la mémoire”, en Ruano-Borbalan, Jean-Claude, *L’histoire aujourd’hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien*, París, Editions Sciences Humaines, pp. 349-351.
- Neffa, Julio César (1998), *Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996). Una contribución a su estudio desde la teoría de la regulación*, Buenos Aires, Eudeba.
- Neustad, Richard E. y Ernest R. May (1986), *Los usos de la historia en la toma de decisiones*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
- Nora, Pierre (1999), “Les lieux de Mémoire”, en Ruano-Borbalan, Jean-Claude, *L’histoire aujourd’hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien*, París, Editions Sciences Humaines, pp. 343-348.
- O’Connell, Arturo (1984), “La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta”, *Desarrollo Económico*, 92, vol. 23, enero-marzo, pp. 479-514.
- Palti, Elías (1999), “El legado como problema”, en Altamirano, Carlos (ed.), *La Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Ariel, pp. 24-34.

- Portantiero, Juan Carlos (1989), "Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)", en Ansaldi, Waldo y José Luis Moreno, *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, pp. 301-346.
- Prebisch, Raúl (1934), "La inflación escolástica y la moneda argentina", *Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio del Rosario*, Rosario.
- Presidencia de la Nación. Secretaría de Informaciones (1952), *Perón anuncia el Plan Económico de 1952 y los precios de la cosecha*, Buenos Aires.
- Pye, Lucien W. (1966), *Aspects of Political Development. An analytic study*, Boston, Little.
- Quattrocchi-Woisson, Diana (1995), *Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé.
- Rapoport, Mario et al. (2006), *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*, Buenos Aires, Ariel.
- Ras, Norberto (1977), *Una interpretación sobre el desarrollo agropecuario en la Argentina*, Buenos Aires, Hemisferio Sur.
- Regunaga, Marcelo, Sandra Fernández y Germán Opacak (2003), *El impacto de los cultivos genéticamente modificados en la agricultura argentina*, Buenos Aires, Foro Argentino de Biotecnología.
- Revel, Jacques (1995), "Micro-análisis y construcción de lo social", *Anuario IEHS*, 10, Tandil, IEHS/Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 125-143.
- (dir.) (1996), *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience*, París, Gallimard/Seuil.
- Revista de Historia* (1957), N° 1, primer trimestre, Buenos Aires.
- Ricoeur, Paul (2000), *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, París, Seuil.
- Rougier, Marcelo (2012), *La economía del peronismo. Una perspectiva histórica*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Ruano-Borbalan, Jean-Claude (1999), "Entrevista a Roger Chartier sobre 'Les représentations du passé'", *L'histoire aujourd'hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d'historien*, París, Editions Sciences Humaines, pp. 16-19.
- Schvarzer, Jorge (1996), *La industria que supimos conseguir. Una historia político social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta.
- Scobie, James R. (1968), *Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino, 1860-1910*, Buenos Aires, Solar/Hachette.
- Seoane, María (1998), *El burgués maldito*, Buenos Aires, Planeta.
- Sidicaro, Ricardo (1996), *Juan Domingo Perón*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- (2003), *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
- Teubal, Miguel (2011), "La crisis de 2001-2002 y el colapso del neoliberalismo en la Argentina", *Realidad Económica*, 261, julio-agosto, pp. 58-84.
- Thorp, Rosemary (comp.) (1984), *Latin America in the 1930's: The Role of the Periphery in World Crisis*, Londres, Macmillan.
- Toledo López, Virginia (2010), "El boom del biodiésel", *Realidad Económica*, 256, noviembre-diciembre, pp. 116-145.
- Tornquist, Ernesto (1920), *El desarrollo de la República Argentina en los últimos cincuenta años*, Buenos Aires, E. Tornquist y Cía. Ltda.
- Trigo, Eduardo et al. (2002), *Los transgénicos en la agricultura argentina. Una historia con final abierto*, Buenos Aires, Libros del Zorzal-IIICA.
- Vitelli, Guillermo (2009), "Los retrasos de la economía argentina frente a las naciones más ricas e industrializadas", *Realidad Económica*, 242, febrero-marzo, pp. 42-66.
- Vovelle, Michel (1999), "Histoire et representations", en Ruano-Borbalan, Jean-Claude,

- L'histoire aujourd'hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d'historien*, París, Editions Sciences Humaines, pp. 45-49.
- Wagner, W. y F. Elejabarrieta (1996), "Representaciones sociales", en Morales, Francisco J. et al. (coords.), *Psicología social*, Madrid, Graw-Hill, pp. 817-822.
- Waldmann, Peter (1981), *El peronismo 1943-1955*, Buenos Aires, Sudamericana.

(Recibido el 22 de agosto de 2012.)

(Aprobado el 28 de noviembre de 2012.)

---

## Autora

**Noemí M. Girbal-Blacha** es doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata, 1972), investigadora superior del Conicet, profesora titular y directora del Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes. Docteur Honoris Causa de l'Université de Pau et Pays de l'Adour (Francia), octubre de 2007. Premio Bernardo Houssay Trayectoria 2011, mención Ciencias Humanas, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Resolución 130/2012. Línea de investigación actual: "La Argentina rural del siglo xx: espacios regionales, sujetos sociales y políticas públicas".

Publicaciones recientes:

- (2011), *Vivir en los márgenes. Estado, políticas públicas y conflictos sociales. El Gran Chaco Argentino en la primera mitad del siglo xx*, Rosario, Prehistoria.
- (2011), "État, savoir, pouvoir et bureaucratie: le déséquilibre régional agricole argentin 1880-1960", *Économies et sociétés*, vol. xlv, t. 44, N° 9, septiembre, París, L'Harmattan, pp. 1601-1626.
- (2011), "La historia regional argentina y los desafíos del Bicentenario (1810-2010)", en Girbal-Blacha, Noemí y Beatriz Moreyra, *Producción de conocimiento y transferencia en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 37-52.

---

## Cómo citar este artículo:

Girbal-Blacha, Noemí M., "Acerca de la memoria y la reflexión histórica en la Argentina bicentennial", *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 4, N° 23, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, otoño de 2013, pp. 145-168, edición digital. En línea: <<http://www.unq.edu.ar/catalogo/311-revista-de-ciencias-sociales-n-23.php>>.